

28 de mayo de 2009

Actualización regional:

ASIA Y OCEANÍA

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A enero-abril de 2009

Documento embargado hasta las 06.01 horas Península y Baleares del 28 de mayo de 2009

La situación de los derechos humanos en gran parte de Asia y Oceanía se deterioró en el primer trimestre de 2009. En el sur de la región, los conflictos de **Sri Lanka** y **Pakistán** ocasionaron graves daños a la población civil y el desplazamiento de centenares de miles de personas. En **China**, el declive económico mundial agravó los problemas de la mano de obra migrante y el malestar en las zonas rurales, lo que dio lugar a medidas más represivas por parte de las autoridades gubernamentales. En **Fiyi**, un golpe de Estado instauró un gobierno militar autoritario, mientras que en **Camboya** el esperado juicio de uno de los mayores responsables de violaciones contra los derechos humanos del país se vio envuelto en denuncias generalizadas de corrupción y en el temor de que el gobierno terminara el proceso prematuramente.

PRIVACIÓN Y EXCLUSIÓN

Aumentó la tensión internacional al anunciar el gobierno de **Corea del Norte** que reanudaría su programa nuclear. Pese a que se cernía la amenaza de una nueva hambruna, Corea del Norte rechazó ayuda alimentaria de Estados Unidos y ordenó a cinco organizaciones humanitarias estadounidenses que abandonaran el país antes del final de marzo.

Las fuerzas de seguridad y operarios de demolición desalojaron en enero por la fuerza a unas 400 familias de la comunidad de Dey Kraham, en el centro de Phnom Penh, por lo que la mayoría se quedaron sin hogar. El lugar designado para el realojo, lejos de donde la comunidad gana su sustento, carece de agua potable, electricidad, alcantarillado y servicios básicos. Unos 150.000 camboyanos corren peligro de ser desalojados por la fuerza debido a disputas de tierras y proyectos agroindustriales y urbanísticos.

En enero, las fuerzas de seguridad tailandesas obligaron al menos a un millar de rohingyas, minoría musulmana del estado noroccidental de Rakhine, en Myanmar, a abandonar el sudoeste de Tailandia en bote. De los miles de rohingyas que huyeron a **Tailandia** y **Malaisia** por mar, cientos están desaparecidos, y se teme que se hayan ahogado. A los rohingyas se les niega la ciudadanía de **Myanmar**, lo que los convierte de facto en apátridas. Quienes son devueltos a Myanmar siguen corriendo grave peligro de que se vulneren gravemente sus derechos humanos, por ejemplo mediante trabajos forzados, desalojo forzoso, confiscación de tierras y severas restricciones a la libertad de circulación.

En **India** se celebraron elecciones parlamentarias nacionales en abril y el resultado todavía es incierto. En el estado de Orissa, más de 7.000 personas de la minoría cristiana languidecen en campos de desplazados internos del distrito de Kandamal, después de que organizaciones nacionalistas hindúes lanzaran ataques contra las comunidades cristianas entre agosto y octubre de 2008.

DOCUMENTACIÓN

AMNISTÍA
INTERNACIONAL 

AMNISTÍA INTERNACIONAL
CATALUNYA
C/ Alfons XII, nº 19-21,
Ppal - 1º
08006 BARCELONA

T: +34 93 209 35 36
F: +34 93 200 77 57
info@amnistiacatalunya.org
www.amnistiacatalunya.org

INSEGURIDAD

Los talibanes paquistaníes expandieron su zona de control y asumieron competencias administrativas sobre unos 3 ó 4 millones de personas del distrito de Malakand, provincia de la Frontera Noroeste en virtud de un “acuerdo de paz” con el gobierno de **Pakistán**. La ocupación de los talibanes y la torpe respuesta militar del gobierno han ocasionado el desplazamiento de alrededor de un millón de personas. En el valle de Swat, corazón del distrito de Malakand, estallaron duros enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes en abril y mayo, lo que ha causado una nueva oleada de desplazamientos.

A principios de año, hasta 250.000 personas estaban atrapadas entre las fuerzas de seguridad gubernamentales y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en la región de Wanní, noroeste de **Sri Lanka**. A finales de abril, la ONU calculó que más de 6.500 civiles habían muerto y 13.000 habían resultado heridos en los enfrentamientos. Los Tigres de Liberación obligaban a la población civil a desplazarse y la empujaban a zonas de Wanní que estaban bajo su control, donde en la práctica los retenían como rehenes y los usaban como escudos humanos contra las fuerzas armadas srilankesas. Como el gobierno restringió el acceso humanitario a las zonas controladas por los Tigres de Liberación, empezaron a escasear los suministros médicos con lo que aumentaron las muertes por enfermedades prevenibles. En abril, al intensificarse los combates y crecer la presión internacional para que se decretase temporalmente un alto el fuego por motivos humanitarios, decenas de miles de civiles se trasladaron a zonas controladas por el gobierno. Actualmente hay más de 150.000 personas desplazadas en 20 campos de tránsito del distrito de Vavuniya. Según los informes, los “pueblos de bienestar” establecidos por las autoridades están desbordados y carecen de las instalaciones adecuadas. Informes fidedignos indican que decenas de personas han sido detenidas y trasladadas a lugares no revelados o en los que se niega todo acceso desde el exterior. No se permite la presencia de observadores internacionales de derechos humanos en la zona de conflicto.

Según la ONG Oficina de Seguridad de **Afganistán** (ANSO), en el primer trimestre de 2009 murieron 342 civiles a consecuencia de los ataques insurgentes y de las operaciones de las fuerzas militares internacionales. Los talibanes y otros grupos insurgentes intensificaron los ataques a principios del año. El 1 de abril se perpetró un atentado suicida con bomba en el edificio del consejo provincial de la localidad meridional de Kandahar que se saldó con 11 muertos, incluido el responsable de educación de Kandahar y el subdirector del departamento provincial de salud. De acuerdo con la información de la ANSO, los ataques de insurgentes pasaron de 381 en febrero de 2009 a 527 en marzo de 2009. La actividad insurgente también aumentó en las regiones del norte y oeste. Según el Ministerio de Salud afgano, unos 9 millones de los 27 millones de habitantes que se calcula que hay en el país sufren inseguridad alimentaria, lo que los deja expuestos a enfermedades estacionales y contagiosas. Más de 230.000 personas internamente desplazadas viven en condiciones lamentables en tiendas, infraviviendas de adobe o edificios en ruinas y, por lo general, carecen de acceso a calefacción, prendas de vestir y servicios de salud.

En el primer trimestre de 2009 aumentaron bruscamente el número y la dureza de los ataques insurgentes contra la población civil en las provincias meridionales de **Tailandia**, de mayoría musulmana. Tras una disminución durante 2008, los insurgentes se reafirmaron en ataques especialmente brutales, por ejemplo, en al menos cinco decapitaciones. En el quinto aniversario del sitio a la mezquita de Krue Se a finales de abril, 10 personas murieron violentamente en un periodo de 24 horas.

Según las autoridades de **Filipinas**, a fecha de marzo de 2009 había 209.000 personas desplazadas debido a las hostilidades de baja intensidad entre las fuerzas armadas filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica. Muchas de ellas están desplazadas desde los combates de agosto de 2008 y carecen de medios para ganar un sustento. Personas desplazadas entrevistadas por Amnistía Internacional en abril afirmaron que las raciones que reciben son insuficientes por lo que se ven obligadas

a regresar a sus pueblos para rescatar lo que queda de sus cosechas, poniendo en peligro sus vidas. Las conversaciones de paz siguen estancadas.

VOCES DESOÍDAS Y SILENCIADAS

Mientras **China** lanzaba en abril el primer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de su historia, las autoridades intensificaban al mismo tiempo las medidas represivas ante al 20º aniversario de las protestas prodemocráticas de la Plaza de Tiananmen, en junio, y el primer aniversario del terremoto de Sichuan, en mayo. Al menos un centenar de activistas de derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente o sufrieron violencia, aunque la mayoría han quedado en libertad. La información recibida sobre protestas en zonas de población tibetana coincide con el endurecimiento de las medidas de seguridad en el periodo previo al 50º aniversario del fallido levantamiento de Tíbet en 1959, que provocó la huida del Dalai Lama a India. En la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang continúan también las férreas medidas de seguridad. El 9 de abril, dos hombres de etnia uigur, Abdurahman Azat y Kurbanjan Hemit, fueron ejecutados por su presunta participación en un atentado cometido en agosto de 2008, cuatro días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, en el que 17 guardias de frontera murieron y 15 resultaron heridos. Dos tibetanos, Losang Gyaltsse y Loyar, fueron condenados a muerte el 8 de abril en Lhasa por su presunta implicación en dos casos diferentes de incendio provocado con resultado de muerte durante los disturbios que estallaron en zonas de población tibetana en marzo de 2008.

Un año después de que el ciclón Nargis asolara **Myanmar**, mientras avanzaba la ayuda humanitaria, el gobierno ha penalizado a la población por ayudar a sus compatriotas a sobrevivir. Las 21 personas detenidas por distribuir alimentos, informar sobre el ciclón o incluso enterrar a los muertos están entre los más de 2.100 presos políticos. Continúan practicándose detenciones con regularidad. Muchas de las personas están recluidas en prisiones alejadas de sus familias y su estado de salud es precario, como en el caso de Zargana, popular comediente y activista veterano, detenido por organizar iniciativas de ayuda humanitaria y criticar la respuesta del gobierno al ciclón.

En **Bangladesh**, las elecciones de diciembre de 2008 marcaron el fin de una era de gobierno interino dominado por el ejército y el inicio del gobierno de la Liga Awami, que prometió adoptar un conjunto de medidas para mejorar la situación de los derechos humanos del país. El gobierno emprendió esfuerzos para crear un tribunal que hiciese rendir cuentas por lo ocurrido durante el conflicto de 1971 que llevó a Bangladesh a independizarse de Pakistán, pero a principios de mayo no había determinado cómo sería ese proceso de rendición de cuentas. A finales de febrero hubo un aparente motín de los Fusileros de Bangladesh (BDR) que se saldó con la muerte de más de 50 militares. Han trascendido informes de abusos graves contra detenidos pertenecientes a los BDR, pero no han podido confirmarse. A principios de mayo, el gobierno no había publicado los resultados de tres investigaciones diferentes sobre el motín ni había aclarado si los actos de amotinamiento se juzgarían ante un consejo de guerra o en tribunales civiles.

En **Fiyi**, después de que en abril el Tribunal de Apelación declarara ilegal el gobierno militar no elegido, el presidente derogó la Constitución de 1997, destituyó a la judicatura, pospuso las elecciones hasta 2014 e impuso la ley marcial durante 30 días. Se promulgaron nuevas leyes “de emergencia pública” para eximir a la policía y a las fuerzas armadas de toda responsabilidad por sus acciones, incluso aunque éstas ocasionaran lesiones o la muerte. Las nuevas leyes han acarreado censura en los medios de comunicación, detención de periodistas, limitaciones graves a la libertad de asociación y amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos o a personas críticas con el régimen.

En las zonas de **Sri Lanka** alejadas de los combates, la libertad de expresión está gravemente amenazada. Cada vez son más numerosos los casos de ataques a los

Por los derechos humanos en todo el mundo.
Premio Nóbel de la Paz 1977.

medios de comunicación, como el asesinato, en enero, de Lasantha Wickramatunge, director del semanario *The Sunday Leader*.

El nuevo primer ministro de **Malaisia** Najib Tun Razak, que asumió el poder en abril, se enfrenta a importantes retos de derechos humanos, especialmente en relación con la libertad de expresión y la reforma del sistema judicial. En enero, Kugan Ananthan murió bajo custodia policial, su cadáver presentaba numerosos signos de abusos físicos. En una operación emprendida en marzo contra autores de blogs en todo el país, se acusó a ocho personas de criticar al sultán de Perak. Decenas de ellas permanecían recluidas en virtud de disposiciones sobre detención administrativa de la Ley de Seguridad Interna, que prevé la detención indefinida sin cargos ni juicio.

IMPUNIDAD

En un acontecimiento histórico, las Salas Especiales de los tribunales de **Camboya**, creadas para dar respuesta a las atrocidades cometidas por el Jemer Rojo hace más de 30 años, celebraron una importante vista inicial en el primer juicio. Kaing Guek Eav, también llamado Duch, está acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de la Oficina de Seguridad S-21, conocida como Tuol Sleng. Sin embargo, el fiscal camboyano se negó a oír más de cinco casos y no se han resuelto denuncias graves de corrupción en el tribunal.

/// FIN

Departament de comunicació d'Amnistia Internacional Catalunya

Cèlia Ramon Wyser.

Tel. 93.209.35.36 (ext.2) o 690.81.44.11

cramon@amnistiacatalunya.org

Documents i comunicats de premsa

www.amnistiacatalunya.org; www.es.amnesty.org

DOCUMENTACIÓN

AMNISTÍA
INTERNACIONAL 

AMNISTÍA INTERNACIONAL
CATALUNYA
C/ Alfons XII, nº 19-21,
Ppal – 1º
08006 BARCELONA

T: +34 93 209 35 36
F: +34 93 200 77 57
info@amnistiacatalunya.org
www.amnistiacatalunya.org